



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1997/NGO/71
17 de marzo de 1997

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
53º período de sesiones
Tema 13 del programa

APLICACION DEL PROGRAMA DE ACCION PARA EL TERCER DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL

Exposición presentada por escrito por Defensores de los Derechos Humanos, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición escrita, que se distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV).

[14 de marzo de 1997]

1. Defensores de los Derechos Humanos apoya y alienta la labor de la Comisión de Derechos Humanos y del Relator Especial, Maurice Glèlè-Ahanhanzo, en la investigación de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, y presentación de un informe al respecto. Defensores de los Derechos Humanos recomienda que prosiga la cooperación con los países para investigar las formas contemporáneas de discriminación racial y facilite la aplicación de las normas jurídicas internacionales para combatir el racismo.

2. La Comisión y el Relator Especial han subrayado que la comunidad internacional conoce no sólo formas institucionalizadas de discriminación racial, como las doctrinas oficiales de superioridad o exclusivismo raciales, sino también formas "nuevas" e indirectas que a menudo se disfrazan bajo una igualdad de principios proclamada para todas las comunidades¹. La Comisión reconoce que los países de todo el mundo, y en particular los países desarrollados, conocen nuevas formas de discriminación racial. Aun cuando muchos países desarrollados han aprobado legislaciones que prohíben diversas formas de discriminación racial institucionalizada y han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, es importante evaluar la eficacia de esa legislación y

comparar las normas jurídicas nacionales con las normas jurídicas internacionales, como las enunciadas en esa Convención ². Además, habida cuenta de la persistencia del racismo en ciertos países, es necesario estudiar las formas indirectas de discriminación racial para combatir el racismo en todas sus manifestaciones.

3. La misión del Relator Especial a los Estados Unidos de América, el informe del Relator Especial ³ y sus recomendaciones al Gobierno de los Estados Unidos proporcionan enseñanzas para la Comisión en su ejecución del Programa de Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. En una declaración a la Comisión, los Estados Unidos subrayaron las medidas jurídicas aplicadas para luchar contra la discriminación ⁴. Aun cuando la legislación es necesaria y es un importante factor en la evaluación de la situación en varios países, la Comisión debe mirar más lejos y estudiar los efectos de la legislación y considerar lo accesibles que están las soluciones jurídicas para las víctimas de la discriminación. Además, la Comisión y los Estados miembros deben examinar el impacto de la legislación y de las políticas que puedan tener unos efectos discriminatorios "indirectos" o desproporcionados en las minorías raciales.

4. Hay varias esferas objeto de especial preocupación que ilustran la necesidad de redoblar los esfuerzos para combatir la discriminación racial y evaluar la eficacia, o la falta de eficacia, de la legislación y de las políticas existentes. Un análisis de esas esferas y la respuesta de los Estados Unidos a las preocupaciones manifestadas por el Relator Especial ponen de relieve la necesidad de una mayor cooperación en la elaboración de nuevas estrategias para combatir la discriminación racial. No se ha observado ninguna señal de que los Estados Unidos hayan proyectado aplicar las recomendaciones del Relator Especial, ni se ha dado a conocer ninguna respuesta a las preocupaciones concretas señaladas en el informe del Relator Especial. En los Estados Unidos las dos esferas siguientes de preocupación reflejan discrepancias entre las normas jurídicas nacionales y las normas jurídicas internacionales de no discriminación. Los problemas puestos en evidencia reflejan problemas que son generalmente aplicables a otros países desarrollados y proporcionan un marco para el análisis de las normas jurídicas nacionales en otros países.

Racismo medioambiental

5. El racismo medioambiental es una esfera que despierta una preocupación cada vez mayor en el ámbito nacional e internacional. Aun cuando la administración Clinton ha reconocido el problema, la respuesta de los Estados Unidos frente al informe del Relator Especial no aborda los problemas relativos a los efectos discriminatorios de la contaminación y degradación del medio ambiente en las minorías raciales. Los estudios realizados han llegado a la conclusión de que la raza es la más importante de las variables ensayadas en asociación con la ubicación de instalaciones de desechos comerciales peligrosos, que representa un cuadro nacional persistente en los Estados Unidos ⁵. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y la Agencia para las Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades han reunido también datos que muestran la existencia de niveles más elevados

de contaminación tóxica en las comunidades afroamericanas ⁶. Las decisiones acerca de la ubicación de los vertederos de residuos tóxicos y otras decisiones que tienen un efecto medioambiental son de carácter altamente político. El acceso de las minorías a la adopción de decisiones y la responsabilidad de aquéllos que tienen autoridad en materia de discriminación racial, son esferas importantes donde es necesario redoblar los esfuerzos para implantar la justicia medioambiental.

6. La Cláusula de Protección Igual de la Enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos podría ser un instrumento para lograr la justicia medioambiental pero, con arreglo a la actual jurisprudencia federal, no ofrece una protección suficiente a las minorías raciales. La Corte Suprema de los Estados Unidos sostiene que una acción gubernamental racialmente neutra no viola la Cláusula de Protección Igual a menos que el demandante pueda probar una intención discriminatoria ⁷. Ello constituye una pesada carga para los defensores de la justicia medioambiental y otros defensores de los derechos civiles, pese a los hechos que muestran unos efectos desproporcionados y falta de acceso a la adopción de decisiones medioambientales. La exigencia de que se muestre una intención discriminatoria es incompatible con las normas jurídicas internacionales enunciadas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que define la discriminación racial como una acción que tenga por objeto o por resultado negar las libertades fundamentales de las minorías ⁸.

El sistema de justicia penal y la aplicación de la pena de muerte

7. En el sistema de justicia penal el racismo es frecuente en cada etapa del proceso. En un estudio realizado por el Gobierno se hallaron disparidades raciales en la acusación, condena e imposición de la pena de muerte ⁹. Esas disparidades raciales en la condena a la pena de muerte, la tendencia hacia el aumento de la utilización de la pena de muerte en los Estados Unidos ¹⁰ y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que defiende la constitucionalidad de la imposición de la pena de muerte a aquéllos que han cometido crímenes a la edad de 16 ó 17 años ¹¹ muestran la necesidad de la aplicación de las normas jurídicas internacionales en los tribunales nacionales.

8. La discriminación racial y el racismo que se halla en las primeras etapas del proceso judicial y en las primeras etapas de la detención y prisión tienen unas consecuencias profundas en la sentencia. Las directrices sobre la forma de sentenciar racialmente neutral siguen teniendo efectos discriminatorios en las minorías porque no toman en consideración la discriminación racial en esas primeras etapas. Además, el hecho de que los tribunales de los Estados Unidos no reconozcan ni aborden de forma eficaz la discriminación racial en el sistema de justicia penal, pese a las pruebas de que existen absolutas disparidades raciales ¹², demuestran la necesidad de que se apliquen las normas internacionales y se rechace la necesidad de la prueba de intención para las políticas que tienen efectos discriminatorios en las minorías.

Conclusión y recomendaciones

9. Muchos países, entre ellos países desarrollados, han promulgado legislaciones que prohíben la discriminación racial intencionada. Sin embargo, las formas contemporáneas indirectas de racismo provienen a menudo de procesos ocultos y son menos susceptibles de proporcionar pruebas directas de intención discriminatoria. Las normas jurídicas internacionales definen ampliamente la discriminación racial, y la Comisión se dedica a combatir todas las formas de discriminación racial. La aplicación de normas internacionales en los tribunales nacionales puede proporcionar una base para evaluar las políticas internas de no discriminación.

10. Defensores de los Derechos Humanos recomiendan que la Comisión continúe centrándose en las formas contemporáneas de discriminación racial en los Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, e instan a esos países a que respondan a las preocupaciones manifestadas por el Relator Especial en un continuo diálogo acerca de la eficacia de las respuestas gubernamentales ante la discriminación racial y las nuevas estrategias para la aplicación del Programa de Acción para el Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Para que el trabajo del Relator Especial sea eficaz las personas deben estar públicamente informadas del diálogo que mantienen los gobiernos y el Relator Especial ¹³.

11. Defensores de los Derechos Humanos recomiendan que se considere la compatibilidad de las normas jurídicas internacionales de no discriminación al examinar la misión a los Estados Unidos en su 54º período de sesiones, en 1998, e insta a los Estados Unidos a que cumplan con el requisito de presentar informes establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por los Estados Unidos en 1994. El Comité examinará las comunicaciones de los Estados Unidos en relación con las normas jurídicas internacionales de no discriminación.

12. Defensores de los Derechos Humanos recomiendan que el Relator Especial compare en futuras misiones las normas jurídicas nacionales de los países donde el racismo va en aumento con las normas jurídicas internacionales, que no exigen que se muestre una intención de discriminación social.

Notas

1. Comisión de Derechos Humanos, 50º período de sesiones, tema 14 del programa, E/CN.4/1994/66. (Consideraciones sobre el mandato del Relator Especial.)

2. Véase el artículo I de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1969), Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 660, pág. 243. (La Convención define la discriminación racial como "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida privada".) Véase también, Anne F. Bayefsky, The principle of Equality or Non-Discrimination in International Law, 11, H.R.L.J. 1 (1990).

3. Informe del Sr. Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Relator Especial encargado de examinar la cuestión de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia o formas conexas de intolerancia, sobre la misión realizada en los Estados Unidos de América, Comisión de Derechos Humanos, 51º período de sesiones, tema 16 del programa, E/CN.4/1995/78/Add.1.

4. Véase la nota del Secretario General, Asamblea General, quincuagésimo período de sesiones, tema 103 del programa, A/50/476, párr. 19, 25 de octubre de 1995.

5. Comisión de Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo, Toxic Waste and Race in the United States (1987). Véase también Oficina General Contable de los Estados Unidos, Siting of Hazardous Waste Landfills and Their Correlation with Racial and Economic Status of Surrounding Communities (1983).

6. Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, Environmental Equity: Reducing Risk for All Communities, vol. 2: Supporting Document (1992); Centro de Lucha contra las Enfermedades, Agencia para las Sustancias Tóxicas y Registro de las Enfermedades, "The Nature and Extent of Lead Poisoning in Children in the United States: A Report to Congress" (1988).

7. Village of Arlington Height c. Metropolitan Development Housing Corp., 429 EE.UU. 252 (1977).

8. Véase la nota 2, supra.

9. Oficina General Contable de los Estados Unidos, "Death penalty sentencing, research indicates pattern of racial disparities", informe al Senado y Comisiones de la Cámara de Representantes sobre la Autoridad Judicial (1990).

10. En abril de 1995, la legislación de 38 Estados dispuso la instauración de la pena de muerte, y el número de ejecuciones se multiplicó por 20 en el pasado decenio. Centro de Información sobre la Pena de Muerte, "Facts about the death penalty" (14 de diciembre de 1995).

11. Stanford c. Kentucky, 492 EE.UU. 361 (1988). El párrafo 5 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la imposición de la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad.

12. Véase McClesky c. Klemp, 481 EE.UU. 2799 (1987).

13. Véase el informe de Maurice Glèlè-Ahanhanzo, Comisión de Derechos Humanos, 53º período de sesiones, tema 13 del programa, párr. 19, E/CN.4/1997/71. (Pese a la intención del Relator Especial de formular observaciones sobre los comentarios de los Estados Unidos al informe del Relator Especial, los comentarios no se han divulgado debido a problemas por parte de los Estados Unidos.)
